

**“Un jornalero” (13 de abril de 2013)** por Roberto Meneses Marquez en *Voces (Voices)* (pp. 636-638)

*Barack Obama se postuló para presidente en 2008 con la promesa de reformar la ley de inmigración de los Estados Unidos. A mediados de su segundo mandato, había deportado a más de dos millones de personas indocumentadas, más que cualquier presidente en la historia de Estados Unidos. Roberto Meneses Marquez es el presidente de Jornaleros Unidos, un grupo que trabaja por los derechos de los trabajadores de la precaria industria de jornaleros, muchos de ellos indocumentados.*

Soy un jornalero indocumentado de Queens que lleva casi veinte años trabajando en este país. Hago trabajos duros y peligrosos en obras de construcción, como la demolición o la recogida de basura, cuando puedo conseguir algún trabajo. He conocido a muchos hombres que han muerto en accidentes laborales o que se han enfermado gravemente por respirar polvo debido a la falta de equipos de protección adecuados.

Merecemos la oportunidad de convertirnos en miembros de pleno derecho de la sociedad a la que contribuimos cada día. Durante la última década, he oído hablar mucho en los medios de comunicación sobre una posible ley de reforma de la inmigración. Pero he aprendido a no creerlo.

A principios de la década de 2000, se habló de que los Estados Unidos y México llegarían a un acuerdo global para legalizar a todos los inmigrantes indocumentados a cambio de un acuerdo de libre comercio que permitiera la inversión privada en Pemex, la empresa petrolera estatal mexicana. Esas conversaciones se rompieron después del 11 de septiembre.

Durante su campaña de reelección en 2004, el presidente George W. Bush volvió a plantear la esperanza de una reforma migratoria para atraer el voto latine, pero fue una promesa vacía. En 2006, salimos a las calles por millones, y nuestras demandas siguieron siendo ignoradas.

El presidente Barack Obama ganó el voto hispano en 2008 prometiendo que en sus primeros 100 días como presidente presentaría una reforma migratoria

integral. Una vez en el cargo, dijo que estaba demasiado ocupado con la crisis económica como para trabajar en la reforma migratoria.

Hoy, en el segundo mandato de Obama como presidente, escuchamos la misma promesa de una reforma migratoria humana y completa.

Pero, no lo veo. Por lo que puedo ver en lo que se está discutiendo, se nos pide que aceptemos un proceso hacia la legalización que llevaría de diez a quince años. Lo único que se ofrece es un simple permiso de trabajador invitado similar al que ya tenemos con los visados H-2A y H-2B.

Los permisos de trabajo, que no son ni mucho menos una solución, son instrumentos de explotación para los trabajadores inmigrantes a ambos lados de la frontera. En los países de origen de los inmigrantes, los intermediarios sin escrúpulos cobran grandes cantidades de dinero, prometiendo ayudar a tramitar los permisos de trabajo, y luego desaparecen con el dinero de la gente. A este lado de la frontera, los patrones exponen a los trabajadores a largas y duras horas de trabajo en condiciones insalubres y sin las protecciones necesarias. Si a los trabajadores no les gusta, pueden perder sus empleos y sus permisos de trabajo.

La creación de un nuevo conjunto de permisos de trabajo, sin un camino real hacia la residencia permanente y la ciudadanía, sólo legalizará la explotación bajo la que vivimos mientras nos obliga a ir al “final de la fila” y a pagar miles de dólares en multas y más impuestos por el privilegio de ser tratados de esta manera.

La "Banda de los Ocho" del Senado (que incluye al senador neoyorquino Chuck Schumer) puede pensar que nos están engañando. Pero yo no puedo tragarme este engaño. Y sospecho que hay muchos otros como yo entre los once millones de indocumentados de este país que entienden lo que se propone y no tendrán ningún motivo para salir “de las sombras” para participar en este proceso.

La desconfianza que siento viene de observar dos administraciones presidenciales sucesivas, una republicana y otra demócrata. Hablan por los dos lados de su boca. Por un lado hablan de legalización, pero por el otro generan más leyes anti-inmigración, aumentan las deportaciones, construyen centros de detención y cárceles y destinan más inversiones a la vigilancia de la frontera.

Tengo más de cuarenta y cinco años, al igual que muchas de las personas con las que trabajo en la construcción. Y cada vez parece más probable que no vivamos lo suficiente para ser legalizados. Esto es injusto. Tras casi dos décadas en

este país, he aprendido un par de cosas: en primer lugar, que no hay que confiar en los políticos, y en segundo lugar, que sólo con nuestra propia capacidad de organizarnos y luchar colectivamente por nuestros derechos veremos mejoras en nuestras vidas.